

INDICIOS DE FRAUDE ELECTORAL ALEJAN UN CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA

Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB

Susanne Gratius, investigadora sénior asociada, CIDOB

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 pretendían ser el inicio de un cambio político hacia la resolución de un conflicto social que ha expulsado a millones de venezolanos del país. Las fundamentadas sospechas de graves irregularidades afectan la credibilidad de los resultados oficiales que dan por vencedor a Nicolás Maduro y cierran la puerta a una pronta reconciliación.

808

JULIO
2024

En contra de los sondeos previos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos frente al opositor Edmundo González Urrutia al que se le atribuyó un 44,2% de apoyos con el 80% de votos escrutados. Mientras Maduro y sus seguidores celebraban el resultado en las inmediaciones de Miraflores, la oposición recomendó calma y tiempo para verificar el recuento, reclamando las actas que no han sido entregadas. La supuesta victoria de Nicolás Maduro, además de contradecir todas las encuestas pre-electorales publicadas que daban un margen de entre el 15 y el 20% a la oposición, ha ido acompañada de retrasos inexplicables en la transmisión de los datos que el gobierno achacó a un hackeo exterior del que no dio pruebas y, 24 horas después de anunciar la controvertida victoria, el Consejo Nacional electoral todavía no había presentado datos detallados de las elecciones.

Salvo amigos incondicionales como los líderes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras, y aliados estratégicos como Irán, Rusia o China, estos últimos con pocas credenciales democráticas, una buena parte de los países de la región han expresado dudas sobre los resultados. Desde acusaciones directas como las de Argentina, Ecuador o Panamá, o la incredulidad de Chile expresada por su presidente y su canciller, a la exigencia de mayor transparencia de muchos otros países incluyendo Brasil y Colombia, que fueron los principales valedores de estas elecciones y reclaman ver los datos detallados. Estados Unidos, el Alto representante de la política exterior de la Unión Europea, y países como España, Portugal o Alemania, entre otros, reclaman los datos que no acaban de llegar.

En comparecencia ante la prensa, el candidato González Urrutia y la líder María Corina Machado llamaron a la calma y afirmaron que han conseguido el 73% de las actas electorales y la victoria de la oposición es irrefutable. A la espera de los informes de los pocos observadores que fueron autorizados a hacer el seguimiento electoral, se mantiene un tenso *impasse* en el interior y entre buena parte de la Comunidad Internacional.

Una contienda desigual

Estas elecciones fueron fruto de un conjunto de factores que propiciaron que gobierno y oposición firmaran el **Acuerdo de Barbados** en octubre de 2023 al que se llegó con la mediación de Noruega y el apoyo de países como México, Brasil y Colombia. El fracaso de la estrategia de confrontación de la parte más radical de la oposición, incluyendo la proclamación de un presidente encargado, **Juan Guaidó**, que llegó a contar con el reconocimiento de más de 60 países, consiguió convencer al grueso de la oposición de retomar la estrategia electoral. Por su parte, el gobierno de Maduro vio en el acuerdo la posibilidad de liberarse de las sanciones internacionales tras un acercamiento de Estados Unidos y la UE, interesados en asegurarse recursos petroleros tras la invasión rusa de Ucrania.

Aunque la oposición fue unida y aceptando las desfavorables condiciones acordadas, una vez más se le ha impedido acceder al poder por las urnas. Las opciones para poner fin a 25 años de Chavismo son limitadas

Las expectativas de la oposición eran optimistas, pese a su clara desventaja ante la intimidación, los trucos legales y la manipulación por parte del gobierno. Además de estar en condiciones financieras y de poder muy desfavorables, durante la campaña se sucedieron encarcelamientos, inhabilitaciones e intimidación a opositores. Pero persistieron en participar pese a la inhabilitación de su candidata más popular y ganadora de las primarias de 2023, **María Corina Machado**, y acordaron unidos respaldar al veterano diplomático Edmundo González Urrutia. Se mantuvieron en la contienda, a pesar de la manipulación de los registros electorales y de los centros de votación, y del hecho de que el 90% de los más de siete millones de venezolanos en el exterior no podían participar. El gobierno denegó la entrada a varias delegaciones de partidos políticos y organismos independientes. Los escasos 635 observadores electorales procedieron de la Unión Africana, la red de Observación Electoral de Educación (una pequeña ONG), un pequeño panel de Expertos de Naciones Unidas (que no hace informe público) y observadores del **Carter Center** (del cual aún se esperan los informes). La Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo enviar ninguna misión porque Venezuela abandonó la organización, y la UE fue desautorizada en mayo por el gobierno de Maduro debido a la continuidad de las sanciones selectivas. Brasil también retiró sus observadores debido a los ataques de Maduro contra su sistema electoral, aunque mantuvo como enviado al hoy asesor y exministro de Exteriores Celso Amorín.

Todas estas maniobras del gobierno sirvieron para atribuirse una victoria que es poco creíble, teniendo en cuenta el deseo de cambio que se percibe en el país, el desgaste de 25 años en el poder, la corrupción galopante, la desinstitucionalización y la debacle económica y social que sumerge a más de un 50% de los venezolanos en la **pobreza** (según estudios independientes ya que no existen estadísticas oficiales). El oficialismo no está dispuesto a dejar el poder y asumir los costes legales y políticos de esta realidad. Antes del primer boletín electoral del CNE que anunció la victoria de Ma-

duro, hubo declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del ministro de Interior advirtiéndole que la respuesta ante posibles altercados sería contundente. En esta situación, la llamada de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas a «contar la verdad» y a distanciarse del régimen de Maduro es ilusoria teniendo en cuenta que cogobiernan el país desde 1999 y la supervivencia del régimen es la suya propia.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio confirmaron el enquistamiento de un autoritarismo competitivo donde no se da opción a la alternancia y el régimen se perpetua por las buenas o por las malas. Sin juego limpio, las elecciones solo sirven para tratar de legitimar la continuidad de Nicolás Maduro otros seis años.

Un escenario postelectoral sombrío

¿Qué pasará en los próximos meses? En primer lugar, continuará la movilización de la oposición contra el fraude electoral presentando sus pruebas. En segundo lugar, aunque se llamó a la calma, ha sido inevitable que las protestas tomaran la calle, provocando las primeras víctimas y detenciones. Pero, sobre todo, se apela al apoyo internacional en la región, a la UE y a EE.UU. exigiendo transparencia y reconocimiento de los resultados reales. Como el propio Maduro admitió en su **discurso de victoria**, la historia se repite. Nuevamente, la disputa política postelectoral girará en torno al reconocimiento del régimen o de la oposición en un enfrentamiento que ya dura un cuarto de siglo.

Aunque la oposición fue unida y aceptando las desfavorables condiciones acordadas, una vez más se le ha impedido acceder al poder por las urnas. Las opciones para poner fin a 25 años de Chavismo son limitadas: las instituciones nacionales son cautivas del gobierno; la solidaridad de la comunidad internacional no ha tenido mucho efecto en el pasado porque Venezuela cuenta con el apoyo de actores como China y Rusia, aunque si se confirma el fraude aumentará el ostracismo internacional; finalmente, la opción de volver a las calles está reeditando nuevos episodios de violencia y represión.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 confirmaron el enquistamiento de un autoritarismo competitivo donde no se da opción a la alternancia y el régimen se perpetua por las buenas o por las malas. Sin juego limpio, las elecciones solo sirven para tratar de legitimar la continuidad de Nicolás Maduro otros seis años, un largo mandato presidencial que en América Latina tiene únicamente México, con la gran diferencia que allí no hay reelección posible. Otros seis años del ineficiente y autoritario gobierno de Nicolás Maduro son una mala noticia para una reconciliación nacional y para el futuro económico, social y político del país. En el mejor de los casos, los próximos meses revelarán la verdad, pero nada asegura que prevalezca. Eso incrementará la inestabilidad y el enfrentamiento entre venezolanos, con consecuencias regionales negativas.